ARTÍCULO

5

EL INFLUJO DE LA CONCILIACIÓN PREVIA CIVIL EN LA PROYECCIÓN DE LA FUTURA POLÍTICA CRIMINAL BOLIVIANA

Tipo de Artículo: Investigación

Barriga Villegas Raúl Arnold

EL INFLUJO DE LA CONCILIACIÓN PREVIA CIVIL EN LA PROYECCIÓN DE LA FUTURA POLÍTICA CRIMINAL BOLIVIANA

Fecha de recepción: 10/06/2025 | Fecha de aceptación: 20/06/ 2025

AUTOR:

Barriga Villegas Raúl Arnold*

* Juez de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer en la ciudad de Potosí. Magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Docente de la Escuela de Jueces del Estado.

ORCID: 0009-0004-2012-5123*

Correos del autor:

arnibarriga@gmail.com*

RESUMEN

El artículo realiza un desarrollo histórico de la conciliación previa desde los antecedentes coloniales y comunitarios hasta la consolidación normativa prevista en el Código Procesal Civil, identificando avances, pero también limitaciones socioculturales que afectan su aplicación efectiva. De igual manera, se efectúa un estudio argumentativo sobre los resultados alcanzados en el ámbito civil, el cual permite proyectar una futura estrategia criminal de corte restaurativo. Dicha política reconfigura el modelo penal vigente promoviendo la justicia restaurativa en casos de menor lesividad, sistematizando procedimientos alternativos al juicio y reduciendo la criminalización excesiva, en la medida en que la conciliación está orientada al cumplimiento del deber cívico de fomentar la paz y pueda convertirse en un eje del sistema penal del siglo XXI. El artículo contiene propuestas orientadas a la adopción de mecanismos normativos que legitimen la conciliación como herramienta transversal para la resolución de conflictos ante hechos punitivos.

ABSTRACT

The article makes a historical development of conciliation beforehand, from the colonial and community antecedents to the normative consolidation foreseen in the Code of Civil Procedure, identifying advances but also socio-cultural limitations that affect its effective application. Likewise, an argumentative study is made on the results achieved in the civil sphere, which allow projecting a future criminal strategy with a restorative approach. Such a policy reconfigures the current penal model by promoting restorative justice in cases of lesser harm, systematizing alternative procedures to trial and reducing excessive criminalization, to the extent that conciliation is oriented to the fulfillment of the civic duty of promoting peace and can become an axis of the penal system of the 21st century. The article contains proposals aimed at adopting regulatory mechanisms that legitimize conciliation as a cross-cutting tool for conflict resolution in the face of punitive acts.

Palabras clave: Conciliación; Constitución; Cultura de Paz; Deber Ciudadano; y, Política Criminal.

Keywords: Conciliation; Constitution; Culture of Peace; Citizen Duty; and, Criminal Policy.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de una cultura de paz es un mandato para el país, tal cual queda instituido en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado (CPE); de acuerdo a la voluntad del constituyente, Bolivia promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz con el propósito de facilitar la temprana resolución de problemas jurídicos (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, art. 10).

El referido precepto incumbe una corresponsabilidad para la ciudadanía boliviana que está llamada a defender, promover y contribuir a la cultura de paz, exigencia configurada en la calidad de deber constitucional previsto en el artículo 108, numeral 4. Por lo que antecede, el fomento de una cultura de paz es una aspiración idealista que proviene desde los pensamientos insertos en la Asamblea Constituyente donde, tras un arduo debate respecto a sus beneficios, quedó consagrada la obligación jurídica de materializarse en la práctica social y cambiar el rumbo del típico conflicto legal hacia nuevos mecanismos institucionales dirigidos a la solución pacífica de controversias.

En razón a la base constitucional desglosada, el Estado boliviano impuso la conciliación previa regulándola en el Código Procesal Civil (Ley Nº 439 de 2013). Dicha figura, comprende un mecanismo alternativo por el que las partes involucradas resuelven sus diferencias mediante el diálogo y el acuerdo, antes de iniciar un proceso judicial formal. Por la intervención del legislador, el artículo 5 del citado Código instituye que la conciliación es una actuación procesal principal, obligatoria en ciertos casos, que tiene el propósito de descongestionar el sistema judicial, para luego dar cabida a la reducción paulatina de la litigiosidad y promover soluciones económicas (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013, art. 5).

A partir de su implementación en 2016, la conciliación fue reconocida equiparándola a un instrumento eficaz configurado bajo la premisa de promover la paz social y la justicia restaurativa en la solución de sus propios conflictos.

Desafortunadamente, la aplicación práctica de la con-

ciliación previa está debilitada por una serie de factores atribuibles al aparato jurisdiccional, evidenciados en la limitada participación de la población en este proceso. Datos oficiales dan cuenta que tres de cada diez personas citadas a audiencias de conciliación no se presentan, siendo un 35% un indicador alarmante. Con ello, queda interrumpida la posibilidad de resolver conflictos de manera pacífica y oportuna, obligando a la judicialización de los casos, aspecto que deriva en mayores costos económicos y emocionales para las partes; en los hechos, allí emerge la saturación de los tribunales (Correo del Sur, 2024).

Estudios doctrinales respecto a la cultura de paz coinciden en que la cultura de paz no se restringe a la ausencia de conflictos; más al contrario, significa un cambio en las estructuras sociales y culturales, así como en las actitudes individuales frente al conflicto (Antezana Rocha, 2024). Por tanto, la cultura de paz es un proceso educativo y transformador destinado al diálogo constructivo junto a la formación de ciudadanos empáticos en la gestión de los conflictos. (Loyola Alvarado, 2023).

La conciliación penal posee creciente interés en la doctrina jurídica boliviana, en razón a su capacidad de descongestionar el sistema judicial y el potencial para encarnar el mandato constitucional de fomentar una cultura de paz. Recientes investigaciones estudian los fundamentos, límites y proyecciones normativas de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos penales; dichos trabajos, publicados en revistas especializadas como la de la Escuela de Jueces del Estado, permiten comprender la evolución de esta figura jurídica y su pertinencia como base para una política criminal menos punitiva y más dialogada.

Un primer aporte lo constituyen Wilhelm Leandro Díaz Mendoza y Zulema Ureña Pinto, quienes en su artículo *"Análisis de la vulneración de los principios de la neutralidad e imparcialidad en el rol de la conciliación penal ejercida por el Ministerio Público"*, examinan críticamente la tensión que existe entre la función acusatoria del fiscal y su rol conciliador dentro del proceso penal. Los autores sostienen que el hecho de que

el Ministerio Público actúe como conciliador de oficio vulnera principios esenciales del debido proceso, principalmente la imparcialidad y neutralidad que deben caracterizar todo acto de conciliación. En su análisis, llegan a la conclusión que esta dualidad de funciones convierte al fiscal en juez y parte, debilitando la credibilidad del mecanismo respecto a su imparcialidad (Escuela de Jueces del Estado, 2021, pág. 165).

En un escenario más estructural, Hugo Eduardo Zenteno Ayaviri, en su trabajo titulado "*La conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos penales*", destaca la necesidad urgente de fortalecer estos mecanismos restaurativos como respuesta al colapso funcional del sistema penal tradicional. Indica que la conciliación proporciona una solución rápida y menos costosa para las partes, visualizando un insumo transformador que estimula el diálogo y reduce la cultura del litigio. El autor recalca que recurrir a formas alternativas de justicia no significa renunciar al sistema judicial formal; al contrario, incumbe complementarlo con instrumentos más accesibles e inclusivos para alcanzar la convivencia pacífica (Escuela de Jueces del Estado, 2021, pág. 91).

Complementando la literatura jurídica, Noemí Colque Flores, en su artículo "*La conciliación penal en el marco de la Ley N° 1173 y su implementación práctica*", realiza un análisis integral de la política pública que impulsó la creación de Unidades Especializadas en Conciliación Penal dentro del Ministerio Público. A partir de la reforma procesal de la Ley N° 1173, la autora describe cómo la conciliación se consolidó como una salida alternativa válida para delitos patrimoniales y culposos, permitiendo extinguir la acción penal cuando se logra la reparación del daño a la víctima. Colque resalta que este mecanismo agiliza el proceso penal promoviendo un enfoque centrado en la víctima, toda vez que promueve el acceso efectivo a la justicia en sectores tradicionalmente excluidos. Del mismo modo, enumera los avances en infraestructura y recursos humanos, con la creación de al menos veinte fiscalías especializadas y cientos de conciliaciones realizadas, aun en etapas tempranas de implementación (Escuela de Jueces del Estado, 2021, pág. 145).

La lectura conjunta de estas investigaciones da cuenta de un cambio de paradigma en la manera de entender el conflicto penal, dado que se deja de concebirlo exclusivamente en calidad de una infracción al orden jurídico sancionable por el Estado, para reconocerlo como una oportunidad de restaurar el vínculo social roto entre las partes. No obstante, a pesar de estos avances teóricos y prácticos, ninguna de las investigaciones revisadas explora la posibilidad de extender la lógica de la conciliación penal hacia una política criminal de carácter restaurativo, tomando como base los aprendizajes generados en la conciliación previa civil. Dicho vacío teórico, representa el punto de partida del presente artículo, el cual propone articular el deber constitucional de promover la paz con una política pública que legitime nuevos instrumentos restaurativos, capaces de reducir la judicialización excesiva y racionalizar el uso del aparato punitivo del Estado.

En este sentido, la propuesta responde al enfoque institucional sostenido por el Órgano Judicial, que considera que la conciliación debe dejar de ser un trámite marginal dentro del proceso penal, para convertirse en una herramienta transversal orientada a la pacificación social, la justicia consensuada y la promoción de una ciudadanía jurídica corresponsable y activa.

Por los fundamentos expuestos, el documento científico desarrollado analiza de qué manera el deber constitucional del ciudadano boliviano de fomentar una cultura de paz, consagrado en el artículo 108.4 de la Constitución Política del Estado, puede materializarse mediante la figura de la conciliación previa civil y, cómo esta práctica jurídica (a partir de los resultados observados en la jurisdicción civil) se proyecta como una experiencia viable para la formulación de una futura política criminal restaurativa en Bolivia. En ese sentido, el artículo tiene como objetivo general demostrar que dicha política, lejos de limitarse a un ideal teórico, puede constituirse en una estrategia concreta de transformación del sistema penal, orientada a reducir la conflictividad judicial, racionalizar el uso del aparato punitivo del Estado y promover una justicia dialogada, primordialmente en los casos de menor lesividad.

1. MATERIALES Y MÉTODOS

Respecto a la metodología adoptada, el artículo es de tipo documental, descriptivo y analítico, con un enfoque cualitativo. Se sustenta en el análisis de fuentes primarias y secundarias, entre las que destacan estudios doctrinales, artículos académicos y publicaciones científicas recientes especializadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

El método de investigación adoptado es teórico-jurídico complementado con análisis de contenido, a partir de la revisión sistemática de documentos normativos vigentes junto a literatura especializada. Para ello, se aplicó el método bibliográfico, útil para examinar la doctrina jurídica, las leyes y los instrumentos legales que regulan la conciliación previa civil en Bolivia. De igual forma, fue indispensable el uso del método analítico-deductivo, orientado a identificar las causas culturales que condicionan la escasa implementación de la conciliación previa en la práctica.

El enfoque cualitativo permitió interpretar los hallazgos gracias a una perspectiva comprensiva, atendiendo a las representaciones normativas y sociales que inciden en la percepción del mecanismo conciliatorio y su potencial proyección como base de una política criminal restaurativa. Cabe destacar que, se recurrió únicamente al análisis de datos secundarios contenidos en informes institucionales y boletines especializados ya publicados, sin aplicación de instrumentos de recolección de datos primarios.

2. RESULTADOS

2.1. Evolución jurídica de la conciliación, una expresión de la cultura de paz

La conciliación previa en sede judicial denota una manifestación expresa de la cultura de paz. Es el resultado de un proceso histórico que pudo consolidarse acorde a la evolución que experimentó el Derecho Civil (Allende Pérez de Arce, 2019). La comprensión de su naturaleza jurídica no es un proceso aislado, habrá de recurrirse al surgimiento del sistema normativo civil boliviano, pero identificando un punto directo de en-

cuentro con los mecanismos de resolución alternativa de conflictos.

De acuerdo con lo investigado, la conciliación goza de los caracteres de anhelo social donde el pueblo llegue a beneficiarse con una decisión pronta (Montoya-Sánchez & Salinas-Arango, 2016).

El conglomerado de normas civiles del país devino de un proceso de recepción y posterior adaptación de modelos jurídicos extranjeros, a los cuales simplemente se les incorporaron elementos socioculturales. El proceso de acogida de normativa externa tiene antecedentes en el período precolombino carente de sistema jurídico codificado; sin embargo, pudo observarse la práctica de soluciones comunitarias aplicada a las problemáticas locales (González Kazén, 2020).

Las investigaciones relacionadas al derecho en los pueblos originarios son escasas, y los estudios existentes concluyen que el Derecho Civil en Bolivia fue impuesto por medio del régimen colonial, caracterizado por la exportación de leyes de orden castellana e indiana. Es posible reconocer, en las prácticas comunitarias precoloniales, una forma rudimentaria de conciliación basada en el diálogo y la mediación de autoridades locales, siendo una manifestación temprana de la cultura de paz incipiente; es decir, la solución de conflictos respondía a una lógica de recomposición de la armonía social y no de sanción punitiva (Berríos-Campos, 2020).

Durante el período colonial, la organización jurídica se estructuró a partir del Fuero Juzgo, las Siete Partidas y las Leyes de Toro, compendios normativos regulatorios de aspectos fundamentales del Derecho Civil, procurando una descripción de la personalidad, la capacidad, los contratos, las obligaciones y la sucesión. El procedimiento judicial, de corte romano-escrito, se fundamentaba en la presentación de pruebas y la intervención del juez como director del proceso, desplazando progresivamente los mecanismos comunitarios de resolución de conflictos (Poczynok, 2021).

En la predicha etapa, la conciliación no tenía un reconocimiento formal de instituto jurídico, habida cuenta

que su práctica fue relegada ante la preeminencia de la autoridad judicial, en su condición de figura central de resolución de disputas. Empero, es posible sostener que la cultura de paz sobrevivió de manera marginal en ciertos usos y costumbres locales, aunque sin respaldo normativo en la estructura legal colonial (Sánchez & María, 2013).

Con la instauración de la República en 1825, la organización jurídica civil continuó bajo la influencia del Derecho Español e incorporó gradualmente componentes del modelo francés, denotando una marcada dependencia de las corrientes jurídicas europeas. La etapa de codificación civil republicana se caracteriza por la adopción de figuras legales clásicas para superar la crisis de normativa dispersa (Rodríguez Veltzé & Rojas Tudela, 2024).

La incorporación explícita de la conciliación emerge durante este período, concretamente en el Código de Procedimiento de Santa Cruz (1831), que estableció la conciliación previa como requisito sine qua non para la tramitación de procesos civiles, delimitando un hallazgo importante en la historia jurídica. La citada disposición, reconocía que el ciudadano que pretendiera accionar judicialmente debía, primero, acudir ante el juez de paz para intentar una solución amistosa. Se colige pues que la exigencia reflejaba el reconocimiento normativo de la importancia de resolver los conflictos por medios no contenciosos, aunque el término "cultura de paz" aún no formaba parte del lenguaje jurídico (Villa-fuerte Philippsborn, 2015).

A la postre, el proceso de codificación continuó con la promulgación del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil (Decreto Ley N° 12760 de 1975). El primero, sistematizó las figuras jurídicas del Derecho Privado a través de una estructura orgánica distribuida en libros, abordando materias como las personas, los bienes, los contratos y las sucesiones. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil mantuvo un sistema dispositivo atenuado, en el que el juez ejercía funciones de dirección procesal, pero la conciliación previa perdió fuerza normativa: se reconocía como una facultad discrecional del juez, pero no como un requisito obligatorio para

iniciar un proceso (Cano Burgoa & Martínez Mercado, 2015).

La conciliación se convirtió en un recurso marginal y eventual, dependiente de la voluntad judicial y de la disposición de las partes, perdiendo el carácter vinculante que había tenido en los Códigos Santa Cruz.

La tendencia a relegar la conciliación en el proceso civil se revirtió con la promulgación del Código Procesal Civil (Ley N° 439 de 2013), que marcó un cambio de paradigma en la justicia civil boliviana. El nuevo Código reinstauró la conciliación previa como requisito obligatorio para la admisión de demandas en determinadas materias bajo el propósito de descongestionar los tribunales y fomentar una cultura de paz en la resolución de conflictos (Flores Olmos et al., 2016).

El artículo 5 del Código establece que "la conciliación es una actuación procesal principal", y los artículos 292 a 297 regulan su procedimiento, estableciendo la obligatoriedad de acompañar el acta de conciliación expedida por el conciliador autorizado al momento de presentar la demanda principal. En rigor, procura materializarse el ejercicio del derecho fundamental a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, previsto en el artículo 115, parágrafo II, de la CPE.

La promulgación del Código Procesal Civil responde al mandato constitucional contenido en el artículo 10 de la CPE, que define a Bolivia como un Estado pacifista, y al artículo 108, numeral 4, que establece el deber ciudadano la promoción de la cultura de paz. No obstante, como se analizará más adelante, la aplicación efectiva de este mandato adolece de problemas culturales que limitan el alcance real de herramienta de pacificación social.

3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CONCILIACIÓN JUDICIAL: AVANCES NORMATIVOS Y DESAFÍOS EN SU IMPLEMENTACIÓN

La conciliación previa en Bolivia no queda limitada al articulado en estudio del Código Procesal Civil, fue complementada por la emisión de protocolos específicos de actuación, aprobados por el Tribunal Supre-

mo de Justicia a través de guías orientadoras para los operadores judiciales. Los aludidos instrumentos delimitan directrices uniformes en pos de la conciliación en sede judicial, situándola en un campo específico de primer momento procesal, toda vez que adquiere el carácter de principal expresión de la cultura de paz.

La experiencia acumulada hasta la fecha da cuenta que, los protocolos son un esfuerzo trascendental en la sistematización del instituto conciliatorio; pero, su aplicación práctica se halla marcada por incoherencias normativas a la que se añade una deficiente difusión institucional, factores que obstaculizaron la consolidación de una cultura de paz en el ámbito judicial.

El primer documento de este tipo es el *Protocolo de Actuación de Conciliación Judicial en Materia Civil*, aprobado mediante Acuerdo de Sala Plena N° 122/2016, de 7 de noviembre. El protocolo simboliza un intento de sistematizar las reglas básicas para la aplicación de la conciliación en el proceso civil; para dicho cometido, incumbe aspectos como la conceptualización del instituto, las clases de conciliación reconocidas, el marco normativo vigente, los principios aplicables, los asuntos susceptibles de ser conciliados y el procedimiento a seguir, desde la solicitud inicial hasta la homologación y ejecución del acta de conciliación (Carrasco Zurita, 2016).

Se trata de un documento que, en su estructura, busca proporcionar una guía práctica para los jueces, conciliadores y partes, en línea con los principios de celeridad, intermediación y oralidad que orientan el nuevo modelo procesal (Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, 2016).

No obstante, la implementación de este protocolo resultó limitada y problemática. Las deficiencias fueron manifestándose en diversos niveles; por ejemplo, la difusión del protocolo entre los conciliadores y jueces quedó calificada de insuficiente, derivando en un desconocimiento generalizado de sus contenidos y de las pautas de actuación que establece.

También existen incoherencias internas en el propio instrumento, producto de una conceptualización poco

clara de algunos temas procedimentales y de una falta de armonización con el resto del marco normativo aplicable, situación que motivó la emisión de un nuevo documento denominado Protocolo de Aplicación del Código Procesal Civil, aprobado mediante Acuerdo de Sala Plena N° 189/2017, de 13 de noviembre.

El segundo protocolo pretendía subsanar las contradicciones del primero y uniformar criterios interpretativos sobre la aplicación del Código Procesal Civil, tomando en cuenta los extremos referidos a la conciliación previa. Lejos de resolver los problemas existentes, la coexistencia de ambos instrumentos generó mayor confusión en los operadores de justicia, quienes enfrentaron la incertidumbre sobre la vigencia de uno u otro protocolo, o sobre la posibilidad de aplicar ambos de manera simultánea (Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, 2018).

La indicada falta de claridad tuvo un impacto en la eficacia de la conciliación previa, por cuanto propició prácticas dispares en los distintos tribunales departamentales, debilitando la confianza de la ciudadanía en el aparato judicial como garante de soluciones pacíficas y eficientes.

Continuaron los problemas identificados en la aplicación de estos protocolos, porque devino la carencia de formación especializada de los conciliadores. Si bien el artículo 7 de las disposiciones adicionales de la Ley N° 439 imponía que la Escuela de Jueces del Estado sería la encargada de ejecutar programas de capacitación en conciliación, en la práctica, la oferta formativa quedó limitada y desarticulada, dificultando la profesionalización del personal encargado de conducir las audiencias de conciliación. Tampoco el Consejo de la Magistratura quedó exento de críticas; en su calidad de órgano responsable de la convocatoria y designación de conciliadores, presentó restricciones presupuestarias y de gestión, achicando la cobertura del servicio de conciliación (Burgoa, 2018).

La difusión insuficiente de la normativa se tradujo en un obstáculo. No se implementaron campañas masivas ni programas de socialización sostenidos en medios de comunicación; por consiguiente, la población

desconocía sus derechos y las ventajas de la conciliación, extremo que disminuyó la calidad de este mecanismo para resolver conflictos.

La situación se agravó aún más cuando fueron requeridos espacios físicos adecuados en los tribunales para la realización de audiencias de conciliación; no obstante, en algunos casos se tuvo que alquilar ambientes externos, con la consiguiente afectación a la logística y seguridad jurídica del proceso (Palacios Xochipa & Cantizani Maíllo, 2022).

La realidad descrita da cuenta que la conciliación previa no pudo consolidarse como un mecanismo de cultura de paz que garantice el cumplimiento del deber constitucional de resolver conflictos vía diálogo previo. La puesta en vigencia de normas y protocolos fue el punto de partida para que el referido deber se materialice, empero, requirió de su implementación integral en otros escenarios jurídicos.

4. EXPANSIÓN Y DESAFÍOS DE LA CONCILIACIÓN EN LAS JURISDICCIONES AGROAMBIENTAL, PENAL Y FAMILIAR EN BOLIVIA

Producto de esta evolución democrática, la conciliación trascendió del ámbito civil para integrarse en diversas jurisdicciones del aparato judicial boliviano. La expansión respondió al mandato constitucional de promover una cultura de paz y garantizar una justicia sin dilaciones, conduciéndose a la democratización de la temprana resolución de pleitos jurisdiccionales en el resto de las judicaturas habilitadas en el país.

En el ámbito agroambiental, la conciliación adquiere la condición de un instrumento esencial para resolver conflictos relacionados con la tenencia de tierras, los derechos de propiedad agraria y la protección de recursos naturales (Macías Vázquez, 2015). A esta merced, el artículo 18, numeral 9, de la Ley N° 1715, otorga al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la facultad de promover la conciliación en controversias vinculadas a la posesión y el derecho de propiedad agraria; se complementa con el artículo 83, numeral 4,

cual prevé la posibilidad de instar a la conciliación durante la audiencia, homologando el acuerdo si es total o parcial (Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2010).

Son evidentes los avances del deber constitucional, pero la conciliación agroambiental carecía de un desarrollo sistemático en la materia. Para fortalecer la conciliación en esta jurisdicción, el Tribunal Agroambiental aprobó instrumentos específicos, traducido en el *Protocolo de Conciliación Agroambiental en Sede Judicial* que otorga a los jueces herramientas para la conducción de audiencias de conciliación, basándose en la experiencia práctica acumulada en el ejercicio de sus funciones (Tribunal Agroambiental, 2022).

Dentro de esta línea temporal y en el marco del pluralismo jurídico, el Tribunal Agroambiental también elaboró el *Protocolo de Conciliaciones Interculturales en Materia Agroambiental*, cuyo contenido versa en criterios teóricos y prácticos para promover la articulación entre sistemas jurídicos diversos. El protocolo reconoce las buenas prácticas desarrolladas por los jueces agroambientales, antes denominados jueces agrarios, quienes promueven conciliaciones interculturales dentro de su labor jurisdiccional, de acuerdo con las competencias previstas en el artículo 152 de la Ley del Órgano Judicial (Tribunal Agroambiental, 2020).

En el campo penal, la conciliación experimentó un impulso significativo con la promulgación de la Ley N° 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que refuerza su carácter como salida alternativa al proceso penal ordinario. Por vez primera, queda introducida la figura del fiscal conciliador, quien tiene la facultad de promover audiencias conciliatorias en los casos permitidos por la ley, priorizando la solución temprana de conflictos de carácter penal. La aplicación práctica de la conciliación penal todavía presenta una percepción social moderada, dado que los ciudadanos, particularmente las víctimas, la perciben como una forma de impunidad (Los Tiempos, 2025b).

Distinta situación se advierte en el ámbito familiar, la

Ley N° 603 (Código de las Familias y del Proceso Familiar) incorpora la conciliación. El artículo 427 prevé la posibilidad de instar a la conciliación de oficio o a petición de parte en todos o algunos de los puntos controvertidos, consolidando esta figura como una herramienta prioritaria para evitar la judicialización innecesaria de conflictos familiares. La conciliación familiar representa una alternativa menos onerosa para resolver disputas en el seno del hogar, pero se tropiezan con aspectos referidos a la tenencia de los propios menores (Gutiérrez Catacora, 2020).

La experiencia acumulada en las jurisdicciones agroambiental, penal y familiar demuestra que Bolivia convirtió en transversal el deber constitucional de garantizar la pacificación social. No obstante, la construcción de una cultura de paz a través de la conciliación multi-jurisdiccional exige la promoción de una participación y consciente de la ciudadanía en la resolución de sus propios conflictos.

5. DISCUSIÓN

5.1. El deber constitucional del ciudadano boliviano de fomentar la cultura de paz y la conciliación en calidad de herramienta de cumplimiento

Corresponde recordar que la Norma Suprema del país, en su artículo 10, establece literalmente que Bolivia es un Estado pacifista orientado a promover la cultura de paz, mandato complementado con el artículo 108, numeral 4, que impone a los ciudadanos el deber de defender, promover y contribuir a la cultura de paz.

Para que dicho mandato sea efectivo, no basta con su reconocimiento normativo; es necesario que la ciudadanía asuma la cultura de paz convirtiéndolo un principio rector de sus interacciones cotidianas, particularmente mediante la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tal cual acontece con la conciliación previa. La conciliación es un proceso voluntario, permite a las partes resolver sus diferencias de manera pacífica.

Por tanto, tiene la finalidad de aportar a la reducción de la carga procesal, datos recientes reflejan avances importantes: por ejemplo, entre 2020 y 2024, la con-

ciación judicial permitió cerrar más de 20.000 casos penales, evidenciando su eficacia como herramienta para desjudicializar conflictos y promover soluciones consensuadas (Ahora El Pueblo, 2024).

El impacto positivo de la conciliación no resulta medible en la cantidad de casos resueltos, es prudente recabar estadísticas del ahorro económico que representa. En un reciente informe, el Consejo de la Magistratura asevera que la conciliación le ahorró al Estado boliviano aproximadamente 197 millones de bolivianos en nueve años, dado que un proceso de conciliación cuesta siete veces menos que un juicio ordinario (Correo del Sur, 2025).

La conservación del erario estatal se traduce en términos de tiempo. Mientras un juicio promedio puede demorar 250 días, una audiencia de conciliación suele resolverse en 50 días, denotando la celeridad de este instituto.

Los datos confirman que la conciliación puede confundirse con una opción económica, pero en realidad es una vía estratégica para reducir la sobrecarga en los tribunales a partir de la materialización del mandato constitucional de paz. A pesar de ello, la participación de la ciudadanía en los procesos conciliatorios no es generalizada, y persiste una significativa reticencia entre la potencialidad de la ella y su uso real.

La experiencia en departamentos como Cochabamba ilustra esta realidad. De acuerdo a un reportaje, en 2024 la conciliación evitó que más de 7.000 procesos civiles y comerciales llegaran a juicio, siendo un indicador de ayuda en la saturada tarea de juzgadores (Los Tiempos, 2025a).

El referido resultado denota la importancia de la conciliación, permitiendo a las partes llegar a acuerdos que son refrendados en idénticas condiciones que la sentencia judicial. Sin embargo, a pesar de estos logros, la resistencia de la población a optar por la conciliación continúa siendo una preocupación, alimentada por una cultura litigante que prioriza el juicio como vía principal de resolución de conflictos.

La resistencia es aún más evidente en las cifras nacio-

nales. De aproximadamente 53.000 procesos anuales que podrían resolverse mediante conciliación, solo el 30% de las partes acude efectivamente a este mecanismo. La cultura de paz, por tanto, no fue plenamente internalizada en la conciencia colectiva, limitando el alcance de la conciliación en su doble dimensión constitucional, vale decir, un derecho y deber ciudadano.

El análisis de *Opinión* confirma la importancia de superar esta mentalidad litigante y asumir la conciliación en su matiz de deber cívico. El medio destaca que la conciliación evita procesos prolongados y costosos, sobre todo, permite preservar las relaciones interpersonales reduciendo la conflictividad que desgasta a las comunidades (Opinión Bolivia, 2025). Se colige que las actividades de socialización o ferias organizadas por los Tribunales Departamentales de Justicia, cultivan una cultura de diálogo en la población, aunque su impacto aún es limitado (Agencia Boliviana de Información, 2025).

En rigor, las iniciativas son un primer paso, pero para cumplir efectivamente con el mandato constitucional, es necesario que la ciudadanía asuma la conciliación como una herramienta legítima para resolver conflictos; es más, los operadores de justicia están obligados a promover activamente su uso, evitando la judicialización innecesaria de casos.

6. OBSTÁCULOS CULTURALES Y ESTRUCTURALES EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER CONSTITUCIONAL DE FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ MEDIANTE LA CONCILIACIÓN

Conforme los datos estadísticos obtenidos, son palpables los beneficios de la conciliación; no obstante, persiste en Bolivia una resistencia cultural a la aceptación y cumplimiento del citado deber ciudadano enfocado a fomentar la paz.

De acuerdo con cifras compartidas por el Ministerio Público, alrededor de 53.000 procesos anuales resultan potencialmente conciliables, pero solo un 30% de las partes accede a las audiencias de conciliación (Erbol, 2022). Tal cual advierte el Ministerio de Justicia y

Transparencia Institucional, es necesario formar más conciliadores y desarrollar campañas de sensibilización para cambiar la mentalidad litigante de la ciudadanía y de los propios abogados, quienes desincentivan el uso de la conciliación.

Los datos históricos igualmente muestran un progreso limitado. Entre 2013 y 2022, cerca de 148.000 personas resolvieron sus conflictos a través de la conciliación, siendo avance significativo, todavía insuficiente frente a la magnitud de la carga procesal que diariamente se acumula en estrados judiciales bolivianos (Agencia de Noticias Fides, 2025).

A nivel de percepción ciudadana, continúa una visión negativa de la conciliación, asociada a una solución de "segunda clase" en los procesos judiciales. Tampoco existe enseñanza jurídica universitaria sobre dicho instituto, donde se identifica que la mayoría de los abogados son formados como litigantes y no como promotores de soluciones pacíficas (Los Tiempos, 2017); por ello, se refuerza la cultura del litigio, quedando perpetuado el incumplimiento del deber constitucional de contribuir a la cultura de paz.

Es cierto, se lograron avances como la resolución de 8 de cada 10 causas mediante conciliación en los primeros meses de la implementación del nuevo Código Procesal Civil, allá por el año 2016; empero, los resultados no fueron sostenidos en el tiempo debido a la falta de voluntad política o resistencia de los propios operadores de justicia (Los Tiempos, 2016). En definitiva, el bajo compromiso ciudadano para participar en procesos de conciliación denota un incumplimiento del deber constitucional de promover la paz, dando paso a un sistema judicial colapsado y una sociedad aún marcada por la confrontación.

7. PROYECCIÓN DE LA FUTURA POLÍTICA CRIMINAL DEL PAÍS, ASUMIENDO LOS RESULTADOS DE LA CONCILIACIÓN PREVIA CIVIL

La evolución práctica de la conciliación previa civil resulta indispensable para repensar una nueva política criminal del Estado, la cual dejará de responder a

una lógica punitivista y de saturación procesal, para orientarse hacia un modelo restaurativo que privilegie la resolución pacífica de conflictos. El cambio de paradigma queda influenciado en razón a los resultados alcanzados en el ámbito civil, donde la conciliación expresó efectividad a través de la reducción de costos aunada a la consolidación de acuerdos duraderos.

Los resultados empíricos de la conciliación previa civil muestran que este mecanismo, bien implementado, puede evitar la judicialización de miles de conflictos anualmente. Datos del Consejo de la Magistratura reportan que decenas o miles de personas accedieron a soluciones de sus controversias civiles por vía conciliatoria entre 2013 y 2024, acreditando una aceptación paulatina por parte de la ciudadanía. El mencionado éxito no es sólo cuantitativo, sino cualitativo, habida cuenta que promueve una justicia orientada a la reparación del daño.

En rigor, la futura política criminal incorporará los principios, metodologías y beneficios observados en la conciliación previa civil, adaptándolos al ámbito del litigio penal. La finalidad no es sustituir la función punitiva del Estado, más al contrario, se pretende racionalizarla, reservándola para delitos de mayor gravedad y reincidencia; mientras que, para delitos leves, patrimoniales sin violencia, o infracciones de menor reproche social, se privilegie la justicia restaurativa como forma eficaz de dar respuesta al conflicto penal.

La proyección de esta política criminal incumbe una reconfiguración integral del modelo penal boliviano. Dicho esto, el legislador priorizará el principio de intervención mínima, evitando el uso excesivo del Derecho Penal como única herramienta de resolución de conflictos. Con este propósito, se debe fortalecer el rol del fiscal conciliador, figura prevista por la Ley N° 1173 dotándolo de formación especializada, respaldo normativo y criterios concretos de actuación.

De la misma forma, se requerirá ampliar su campo de intervención más allá de lo meramente formal y de carácter facultativo, consolidando su participación dentro de la política criminal restaurativa penal. Dejando de lado la criminalización excesiva a través de

la promulgación de leyes propias del populismo penal, se hace imprescindible redactar documentos jurídicos específicos que sistematicen los procedimientos de conciliación penal, actualmente dispersos y aplicados con desigualdad territorial y conceptual, afectando la seguridad jurídica de la ciudadanía.

En el país, aproximadamente el 70% de las causas penales podrían resolverse sin juicio, pero terminan en largos procesos por falta de alternativas reales, razón por la cual es menester un compromiso serio de transitar de una justicia retributiva (caracterizada por la multiplicación de tipos penales y el colapso institucional) a una justicia restaurativa (que reduzca la reincidencia promoviendo la reparación del daño a la víctima).

La conciliación se asemeja a un vehículo de pacificación y de cumplimiento del deber ciudadano de preservar la cultura de paz, siendo este el nuevo paradigma de justicia penal boliviana para el siglo XXI. Gracias a la presente mirada jurídica, la política criminal del futuro no estará anclada en perseguir o castigar como única vía de control social, apostará por el empoderamiento de los sujetos involucrados durante el conflicto penal. Por tanto, la transición hacia este nuevo modelo requiere adecuación legislativa, y una ciudadanía comprometida con métodos alternativos de resolución de controversias aplicados a los hechos punitivos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En mérito al desarrollo del presente artículo puede concluirse que, la conciliación previa civil representa un instrumento jurídico de alta relevancia constitucional y política, en tanto responde directamente con el mandato del artículo 108.4 de la Constitución Política del Estado, cual impone al ciudadano el deber de fomentar la cultura de paz; empero, queda al descubierto una contradicción persistente entre el reconocimiento normativo de la conciliación y su escasa implementación en la práctica.

A pesar de su carácter obligatorio y prioritario en diversos ámbitos del Derecho nacional, continúa siendo relegada por una cultura jurídica adversarial, fuerte-

mente influenciada por el paradigma punitivo y la inercia institucional.

La indicada resistencia se manifiesta en la débil participación ciudadana en procesos conciliatorios y, por supuesto, en la ausencia de políticas públicas que consoliden su valor estructural dentro del aparato punitivo del país.

Las estadísticas disponibles muestran que un porcentaje reducido de los casos que podrían resolverse mediante conciliación efectivamente concluyen por esta vía. La referida tendencia incumbe un uso excesivo del aparato jurisdiccional estatal, coadyuvando a la judicialización innecesaria de conflictos de baja lesividad e incrementando los costos económicos y sociales para las partes involucradas.

En tal sentido, este trabajo plantea que los aprendizajes obtenidos a partir de la conciliación previa civil pueden constituirse en el fundamento empírico y normativo para proyectar una política criminal restaurativa en Bolivia; dicha política permitiría rediseñar el modelo penal vigente hacia una estructura más racional, en la que se prioricen mecanismos autocompositivos garantizando la reparación del daño a las víctimas; en rigor, ello repercutirá en que logre incentivarse la cultura dialógica por encima del castigo, reduciendo la reincidencia a través de la corresponsabilidad.

La conciliación, en este sentido, deja de ser un mero instrumento procesal para convertirse en un eje estructural de reforma judicial y política criminal; porque su implementación (en calidad de estrategia transversal dentro del sistema de justicia penal) aliviará la carga procesal del Ministerio Público y del Órgano Judicial, consolidando un modelo de justicia cercano a las necesidades sociales y verdaderamente orientado a la pacificación de la vida en comunidad.

Hay un vacío en la literatura jurídica nacional respecto al nexo entre conciliación civil y política criminal, el

cual es precisamente el punto de partida del presente aporte académico que propone una transición a través de la conciliación como práctica procesal hacia su reconocimiento de pilar operativo de un nuevo modelo restaurativo de justicia penal.

En cuanto a las recomendaciones, puede colegirse que, resulta primordial la implementación de programas de formación y sensibilización dirigidos a la ciudadanía. Es indispensable superar la cultura litigante arraigada, promoviendo la conciliación en su condición de una práctica cotidiana y responsabilidad cívica.

De esta manera, se recomienda reforzar la infraestructura y optimizar los procesos de conciliación en todas las jurisdicciones, garantizando el acceso efectivo y oportuno a este mecanismo por la totalidad de sectores poblacionales. La creación de espacios de diálogo a fin de ampliar la participación activa de la población son pasos esenciales para que la conciliación posibilite el cumplimiento del deber constitucional de cultivar la paz.

De acuerdo con la experticia adquirida, es indefectible la proyección de una política criminal basada en los logros obtenidos en sede civil mediante la conciliación. La experiencia acumulada da cuenta que gran parte de los conflictos penales podrían ser resueltos tempranamente por vía conciliatoria, evitando la sobrecarga judicial.

En tal sentido, se recomienda el fortalecimiento del rol del fiscal conciliador durante los procedimientos penales alternativos, criterio que permite abandonar los enfoques de criminalización excesiva que caracterizan al populismo punitivo.

La futura política criminal del Estado quedará orientada hacia un modelo restaurativo que contemple la resolución dialogada de conflictos a fin de alcanzar la reconstrucción del vínculo social, acorde al mandato constitucional de construir una sociedad pacífica.

BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Boliviana de Información. (2025). Fiscalía continúa plan de descongestionamiento de carga procesal mediante jornadas de conciliación y turnos de fin de semana. ABI. <https://abi.bo/index.php/seguridad2/59957-fiscalia-continua-plan-de-descongestionamiento-de-la-carga-procesal-mediante-jornadas-de-conciliacion-y-turnos-de-fin-de-semana>
- Agencia de Noticias Fides. (2025). En nueve años 148.000 personas accedieron a la justicia por la vía de la conciliación—Agencias de Noticias Fides. Agencia de Noticias Fides - Bolivia. <https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-nueve-anos-148000-personas-accedieron-a-la-justicia-por-la-via-de-la-conciliacion>
- Ahora El Pueblo. (2024). La conciliación judicial cierra más de 20 mil casos desde 2020 hasta 2024. Ahora El Pueblo. <https://ahoraelpueblo.bo/index.php/nacional/seguridad/la-conciliacion-judicial-cierra-mas-de-20-mil-casos-desde-2020-hasta-2024>
- Allende Pérez de Arce, J. A. (2019). Fortalecimiento del trámite de la conciliación como mecanismo para descongestionar los tribunales civiles de justicia. *Revista de derecho (Valdivia)*, 32(1), 255-273. <https://doi.org/10.4067/50718-09502019000100255>
- Antezana Rocha, C. A. (2024). La mediación como alternativa ante las controversias inversionista-Estado. *Revista Jurídica Derecho*, 13(20), 109-132.
- Berríos-Campos, C. (2020). El camino del ostracismo: La justicia en el mundo andino y la negación de la reciprocidad en Guaman Poma de Ayala. *Letras (Lima)*, 91(133), 187-210. <https://doi.org/10.30920/letras.91.133.8>
- Burgoa, L. C. (2018). Aporte de la Conciliación Extrajudicial a la Resolución de Conflictos: Retos y Desafíos para su Implementación en la Sociedad Boliviana. *Revista Compás Empresarial*, 9(24), Article 24. <https://doi.org/10.52428/20758960.v9i24.812>
- Cano Burgoa, C. L., & Martínez Mercado, K. T. (2015). El proceso civil oral en Bolivia: Viabilidad y aplicabilidad. *Compás Empresarial*, 6(15), 7.
- Carrasco Zurita, K. A. (2016). El perfil del conciliador en el código procesal civil boliviano (Ley 439). Estudio teórico doctrinal sobre la contribución de los conciliadores al descongestionamiento de causas en la etapa previa de los procesos de conocimiento [masterThesis, Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre]. <http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/701>
- Correo del Sur. (2024). En Sucre, tres de cada diez personas no van a conciliar. *Correo Del Sur*. <https://correodelsur.com/economia/20240819/en-sucre-tres-de-cada-diez-personas-no-van-a-conciliar.html>
- Correo del Sur. (2025). La conciliación le ahorró al Estado Bs 197 millones. *Correo Del Sur*. <https://correodelsur.com/economia/20250310/la-conciliacion-le-ahorro-al-estado-bs-197-millones.html>
- Erbol. (2022). Siles: Conciliación abarata costos al Estado y litigantes en la resolución de conflictos. *Erbol*. <https://erbol.com.bo/seguridad/siles-conciliacion-abarata-costos-al-estado-y-litigantes-en-la-resolucion-de-conflictos>
- Escuela de Jueces del Estado. (2021). *Revista Jurídica: Conciliación Judicial en las Jurisdicciones Ordinaria y Agroambiental y Conciliación Extrajudicial en Bolivia*. Escuela de Jueces del Estado. <https://eje.gob.bo/assets/uploads/revista/archivo/revista-banner-1.pdf>

- Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial de Bolivia.
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2013). Código Procesal Civil, Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013. Gaceta Oficial de Bolivia. <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/439>
- Flores Olmos, D. R., Cano Burgoa, L. M. L., & Covarrubias Fernández, M. B. (2016). Análisis de la implementación del proceso oral por audiencia en materia procesal civil en Bolivia. *Compás Empresarial*, 7(20), 15.
- González Kazén, T. (2020). El sistema jurídico de los pueblos indígenas: Una forma de hacer justicia. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 53(158), 619-650. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2020.158.15631>
- Gutiérrez Catacora, A. (2020). La conciliación previa en los procesos ordinarios familiares en la ciudad de La Paz [Thesis, Universidad Mayor de San Andrés]. <https://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/38327>
- Instituto Nacional de Reforma Agraria, I. N. de R. (2010). Manual de conciliación y gestión de conflictos. INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. https://books.google.com.bo/books/about/Manual_de_conciliaci%C3%B3n_y_gesti%C3%B3n_de_co.html?id=36GfzwEACAAJ&redir_esc=y
- Los Tiempos. (2016). En 8 de 10 causas se logró conciliar. *Los Tiempos*. <https://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20160727/8-10-causas-se-logro-conciliar>
- Los Tiempos. (2017). Tres de cada 10 casos en materia civil se resuelven por conciliación. *Los Tiempos*. <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171124/tres-cada-10-casos-materia-civil-se-resuelven-conciliacion>
- Los Tiempos. (2025a). En 2024, la conciliación en Cochabamba evitó más de 7 mil procesos judiciales. *Los Tiempos*. <https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20250227/2024-conciliacion-cochabamba-evito-mas-7-mil-procesos-judiciales>
- Los Tiempos. (2025b). La Conciliación en Materia Penal: Un Instrumento Fundamental para la promoción de una cultura de paz. *Los Tiempos*. <https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20250420/columna/conciliacion-materia-penal-instrumento-fundamental-promocion>
- Loyola Alvarado, O. J. (2023). Educación para la paz: Estado del arte de cultura de paz, discusión de las teorías y producción científica. *Prohominum. Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 5(4), 123-133. <https://doi.org/10.47606/acven/ph0212>
- Macías Vázquez, M. C. (2015). La conciliación y los conciliadores en la administración de justicia en materia agraria. *Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria: estudios en homenaje a Jorge Carpizo*, Vol. 3, 2015 (Justicia), ISBN 978-607-02-6305-7, págs. 371-386, 371-386. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5316326>
- Montoya-Sánchez, M. Á., & Salinas-Arango, N. A. (2016). La conciliación como proceso transformador de relaciones en conflicto. *Opinión Jurídica*, 15(30), 127-144. <https://doi.org/10.22395/ojum.v15n30a6>
- Opinión Bolivia. (2025). Los avances en la conciliación. *Opinión Bolivia*. <https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/avances-conciliacion/20250305000038968016.html>

- Palacios Xochipa, J., & Cantizani Maíllo, R. (2022). Los principios de la mediación en Bolivia. Los principios de mediación y conciliación en América Latina y el Caribe: análisis comparado a partir de la Ley modelo de la CNUDMI sobre mediación comercial internacional y acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, 2022, ISBN 978-628-7533-06-6, págs. 145-156, 145-156. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8674491>
- Poczynok, C. M. (2021). Los Procesos civiles como fuente para el estudio de las luchas por los derechos de propiedad de la tierra (Buenos Aires, 1776-1822). *Varia Historia*, 37, 393-427. <https://doi.org/10.1590/0104-87752021000200004>
- Rodríguez Veltzé, E., & Rojas Tudela, F. L. (2024). Momentos constituyentes, crisis institucional y protesta ciudadana. Apuntes para reflexionar las reformas constitucionales necesarias. *Revista Jurídica Derecho*, 13(20), 277-296.
- Sánchez, M. de, & María, A. (2013). La pena en las consuetas Indianas: Los concilios y la redacción de esas normas. *Revista de historia del derecho*, 45, 0-0.
- Tribunal Agroambiental. (2020). Protocolo de Conciliaciones Interculturales en Materia Agroambiental. Tribunal Agroambiental. <https://www.tribunalagroambiental.bo/wp-content/uploads/2020/12/ProtocoloWEB.pdf>
- Tribunal Agroambiental. (2022). Protocolo de conciliación Agroambiental en Sede Judicial. Tribunal Agroambiental. <https://www.tribunalagroambiental.bo/2022/01/28/protocolo-de-conciliacion-agroambiental-en-sede-judicial/>
- Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. (2016). Protocolo de Actuación de Conciliación Judicial en Materia Civil. <https://tsj.bo/publicaciones/protocolo-de-actuacion-de-conciliacion-judicial-en-materia-civil/>
- Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. (2018). Protocolo de Aplicación del Código Procesal Civil. <https://tsj.bo/publicaciones/protocolo-de-aplicacion-del-codigo-procesal-civil/>
- Villafuerte Philippsborn, F. D. (2015). Origen, evolución histórica y naturaleza del Art. 309 del Código Civil boliviano. *Revista Ciencia y Cultura*, 19(35), 35-53.